



© SENADO DE LA REPÚBLICA

Congreso Nacional,
11 de marzo:
Ceremonia de
transmisión del
mando presidencial.

El inicio de un nuevo ciclo

Como ha sido bastante habitual en los últimos años en Chile, el cambio de mando presidencial genera expectativas de que podría abrirse una nueva etapa y asumirse nuevos rumbos.

El desafío principal, en cualquier caso, está en que Chile necesita reconstruir una política que pueda gobernar una sociedad compleja sin recurrir a cambios refundacionales constantes.

🕒 EL 11 DE MARZO, EN CHILE, ESTUVO MARCADO POR algo más que una simple ceremonia de cambio de mando presidencial. Cada transición democrática genera expectativas en un país que reflexiona sobre su trayectoria. Sin embargo, en ocasiones, ese cambio cobra un significado más profundo, transmitiendo la sensación de que comienza una etapa diferente, quizás un nuevo ciclo político. La llegada del gobierno de José Antonio Kast en este contexto tiene ese potencial significativo. No solo implica sustituir una coalición por otra, sino que también simboliza una reacción ante la década tumultuosa que acaba de vivir el país.

El nuevo gobierno se presenta como una autoridad de emergencia. Su discurso señala que Chile enfrenta un deterioro institucional, un debilitamiento del orden público, un estancamiento económico y una crisis moral. Por ello, promete recuperar la seguridad y la autoridad del Estado, así como el crecimiento y valores como el trabajo, la disciplina y la familia. En resumen, busca restablecer el orden. Sus primeras acciones tras asumir van en esa dirección, especialmente en el plano simbólico: zanjás y cercas en el norte, austeridad y reducción del sector público, lucha contra el delito y la propuesta de una legislación «ómnibus» para agilizar el trabajo en el Congreso y lograr un impacto inmediato en materia de restauración, recuperación y método.

Se observa una simetría irónica. La administración de Gabriel Boric, que acaba de terminar, también llegó al poder con propuestas de cambio profundo, pero

José Joaquín Brunner
Académico Universidad
Diego Portales y
Universidad de Tarapacá

con una orientación ideológica distinta. Impulsada por el estallido social de 2019, buscaba abrir un nuevo ciclo de transformaciones estructurales. La historia reciente revela, por tanto, una alternancia de proyectos ambiciosos que intentan redirigir el rumbo del país. Ambos nacen de la misma percepción: que el orden establecido desde la transición había llegado a su límite.

Cambio de marea global

Pero Chile no actúa en un vacío. El crecimiento de una derecha de postura restauradora forma parte de una tendencia global que afecta a varias democracias occidentales. Desde Estados Unidos hasta Europa y América Latina, emergen movimientos que reaccionan ante lo que consideran excesos del progresismo actual y de las izquierdas en todas sus formas. En torno al movimiento MAGA en Estados Unidos, así como en redes internacionales como la Political Network for Values, donde el presidente Kast desempeña un papel importante, se forma una alianza ideológica de derechas conservadoras que defiende la soberanía nacional y la tradición cultural, y



crítica abiertamente la expansión del Estado y las nuevas agendas identitarias, conocidas como *woke*.

Este fenómeno es de carácter supranacional y, principalmente, reactivo. Sus defensores creen que las élites cosmopolitas y tecnocráticas han promovido cambios culturales y políticos que borran las identidades nacionales, debilitan las normas tradicionales y amplían la intervención del Estado sin límites. Frente a esto, utilizan una retórica que apela a la «gente», a las comunidades locales y a las formas de vida consideradas auténticas y saludables. Así, el conflicto se transforma en una lucha cultural.

Chile se suma a esta tendencia con una historia propia. Por ello, para entender el presente, es útil remontarse al menos a las últimas seis décadas de nuestra historia política.

Trayectoria sísmica

La Revolución en Libertad de los años sesenta abrió un ciclo de expectativas de cambio que se profundizó con la propuesta de una vía chilena al socialismo. El golpe de 1973 cortó abruptamente ese proceso, dando paso a una dictadura prolongada que combinó el autoritarismo político con una profunda transformación económica neoliberal. Posteriormente, se produjo la transición a la democracia y su consolidación, centradas en la búsqueda de estabilidad institucional y de modernización en todos los ámbitos durante más de veinte años. Paralelamente, en ese período, Chile se integró por completo al mundo global, adoptando una cultura de expectativas de movilidad, de consumo masivo y de sentimientos liberalizadores de la modernidad secular.

Esos equilibrios, que incluían tensiones y malestares entre la democratización, la modernización, la individualización y la subjetivación de la autonomía personal, empezaron a deteriorarse a partir de la mitad de la década pasada.

Desde ese momento, Chile vivió una etapa de inestabilidad política cuya gravedad solo puede compararse con los períodos más críticos de su historia moderna. La crisis social de octubre de 2019 puso en duda las instituciones del Estado de derecho y los avances en bienestar social, y amenazó el orden cotidiano mediante una explosión de violencia anárquica que —por la ausencia de una estructura orgánica— se denominó «lumpen» para describir el comportamiento de personas marginadas y desplazadas, en estados de alienación, anomia o con sentimientos intensos de frustración y de exclusión social.

Esto inició un proceso constituyente para redefinir los fundamentos del orden político y las relaciones de poder en la sociedad. La pandemia, que llegó pocos meses después, intensificó las tensiones sociales y económicas. La elección de Boric en 2021 pareció simbolizar el impulso de cambio que emergió tanto en las calles como en la

Convención Constitucional. Él asumió el gobierno como representante de una nueva generación socializada en la democracia, con promesas de un aire fresco de izquierda y de una cultura de rebeldía juvenil, enfocándose en aspectos simbólicos: el estilo, el discurso y los actos performativos.

El rechazo del plebiscito a la propuesta constitucional de 2022 cambió radicalmente ese panorama. La derrota no solo canceló el plan de una nueva Constitución, sino que también debilitó la credibilidad del programa refundacional del gobierno, dejándolo en suspenso. La rebeldía performática perdió prestigio y, de repente, quedó asociada a la inexperiencia, la superficialidad y la falta de habilidad.

Un segundo intento de reforma constitucional, impulsado por la derecha en su postura más dura (entonces, los Republicanos), también fue rechazado en diciembre de 2023. La principal causa de este rechazo fue la falta de visión histórica del liderazgo de esa derecha, que, aunque recibió un texto de amplio consenso, decidió desintegrarlo para imponer su propia narrativa y valores excluyentes. Así, el país clausuró una etapa dedicada a redefinir su pacto institucional.

Gobierno de emergencia

En los años siguientes, la polarización política se intensificó, oscilando entre la promesa de cambios radicales y el temor a que se quebrara el orden establecido. Este contexto llevó al triunfo electoral de Kast. Su liderazgo está estrechamente relacionado con su trayectoria política previa: nació al inicio de la Revolución en Libertad, su infancia ocurrió durante la crisis democrática y su juventud durante la dictadura militar, a la cual apoyó en el plebiscito de 1988. Luego, desarrolló su carrera en la Unión Demócrata Independiente, donde mantuvo una oposición firme a los gobiernos de la Concertación. La ruptura con su propio partido en 2016 se debió a la convicción de que la derecha tradicional estaba abandonando sus principios fundacionales.

Desde ese momento, Kast centra sus esfuerzos en construir un proyecto político que revitalice una identidad conservadora más clara. En este proceso, logró consolidar una hegemonía en su campo y establecer vínculos con redes internacionales de la derecha dura a nivel global. El fruto de sus esfuerzos es el movimiento político que actualmente gobierna Chile.

Su horizonte ideológico generalmente se ilustra con la metáfora histórica del «orden portaliano». Este concepto no alude literalmente al siglo XIX, sino a un ideal de autoridad basado en los estamentos, la disciplina institucional y las virtudes cívicas vinculadas a la estabilidad del Estado-nación. Desde esta visión, el Estado debe ser fuerte en materia de seguridad y de orden público, pero limitado en su intervención en la sociedad y la economía. La prosperidad, según esta perspectiva,

proviene del impulso de la iniciativa privada y de la confianza en los mercados.

El nuevo gobierno enfrenta un entorno empujado para llevar a cabo este proyecto. Su «agenda de emergencia» contempla una lucha frontal contra el crimen organizado, un control migratorio más riguroso, la simplificación de trámites gubernamentales, la revitalización del crecimiento económico y la recuperación de ciertos valores culturales considerados debilitados. Todo ello se acompaña de una fuerte crítica a la supuesta ineficacia del sector público y al debilitamiento del sentido del deber. La auditoría del período anterior será una evaluación que pondrá a prueba la estabilidad de las instituciones estatales.

Escenarios prospectivos

La cuestión inevitable es si ese programa puede implementarse en el cuadro político actual. Aunque el sistema institucional chileno presenta tensiones, mantiene un carácter pluralista y competitivo. El Congreso está fragmentado y la sociedad civil mantiene un potencial—aunque disminuido—de resistencia. Actualmente, ningún gobierno tiene la capacidad de imponer su visión de forma unilateral.

Por ahora pueden visualizarse diferentes escenarios para el ciclo político que se inicia. Uno de ellos es la exitosa consolidación del proyecto gubernamental, que requeriría avances claros y relativamente rápidos en materia de seguridad, así como una recuperación económica en la base de la sociedad. Si estos logros se combinan con una coalición de gobierno disciplinada y una oposición que se debilita de forma continua, podría emerger un nuevo modelo de gobernabilidad con un liderazgo conservador. En ese caso, se comenzaría a hablar de un ciclo político que podría extenderse más allá de un solo mandato presidencial.

Sin embargo, este escenario requiere condiciones exigentes. Son necesarias una estabilidad económica internacional, una capacidad administrativa sólida del Estado y un nivel de cohesión política que no suele ser común en democracias fragmentadas. Además, se requeriría una mejora significativa en los servicios sociales, a los que la población accede de manera masiva. La historia reciente indica que esas coincidencias son poco frecuentes.

Un segundo escenario es el colapso prematuro del diseño inicial. Con solo sumar errores de gestión, crisis económicas o conflictos institucionales, se puede socavar la legitimidad de un gobierno que generó altas expectativas. También está el «choque de realidad» que enfrentan inevitablemente los gobiernos en proceso de refundación restauradora al lidiar con la complejidad de los problemas y la escasez de recursos (fiscales, humanos, de tiempo, de organización y de coordinación). Algo similar ocurrió con el programa original del gobierno de Boric cuando el plebiscito del rechazo de 2022 cambió el equilibrio político que lo sostenía. Nuestra historia está

Al revisar la última década, la enseñanza más importante quizá sea que el país no logrará estabilizarse si sigue alternando entre proyectos que proponen comenzar desde puntos opuestos a los anteriores.

llena de restos de construcciones ideales que colapsan. Chile es un ejemplo de desarrollo frustrado

Existe una tercera opción entre ambos extremos, posiblemente la más plausible en términos de comparación. Consiste en una normalización progresiva de la emergencia. Actualmente, en círculos cercanos al gobierno, hay una preocupación clara por el eslogan contundente creado por los estrategas de Kast, que, sin embargo, podría jugar en su contra. Las urgencias podrían acabar desmoronando, desde adentro, la acción gubernamental a mediano plazo. Además, los grandes objetivos de refundación tienden a desaparecer entre las tareas cotidianas del gobierno. Las reformas son parciales; los conflictos aumentan y la política sigue un ritmo incremental, basado en lo posible. En la tradición anglosajona, esto se llama *muddling through*: avanzar como se pueda, ante imprevistos y equilibrios inestables. Entre resbalones y caídas, en un terreno fangoso.

Si ese fuera el rumbo del ciclo que inicia, el país podría experimentar un *déjà vu*. Tras una década marcada por crisis y promesas de cambios profundos, la política volvería a centrarse en la gestión cotidiana y en soluciones temporales a los problemas semanales. Esto no implicaría necesariamente un fracaso; en ciertos casos, la estabilidad democrática requiere la capacidad de moderar las aspiraciones de transformación. Para el gobierno, sería renunciar a sus metas ambiciosas; algo similar a lo ocurrido durante el mandato de Boric.

País de extremos

El desafío principal, en cualquier caso, va más allá del destino de un gobierno en particular. Chile necesita reconstruir una política que pueda gobernar una sociedad compleja sin recurrir a cambios refundacionales constantes. Las democracias maduras aprenden a aceptar el conflicto y la diversidad, sin que cada elección se convierta en una oportunidad para redefinir completamente el orden social. Al analizar las últimas seis décadas en Chile, encontra-



La vida política debería asemejarse a una larga conversación colectiva sobre avances graduales, continuidad, etapas de desarrollo, desacuerdos y formas de superarlos, además de fortalecer el tejido social y mostrar lo fácil que es dañarlo y desintegrar el país.

mos altibajos significativos sin lograr un equilibrio entre nuestras energías internas, que a menudo llevan al país a extremos, al igual que nuestra loca geografía.

Al revisar la última década, la enseñanza más importante quizá sea que el país no logrará estabilizarse si sigue alternando entre proyectos que proponen comenzar desde puntos opuestos a los anteriores. Cada gobierno

inicia su mandato con la creencia de que el país está en ruinas y que no hay avances útiles para construir, lo que dificulta ciclos prolongados y fragmenta la historia en episodios enfrentados.

En contraste, la vida política debería asemejarse a una larga conversación colectiva sobre avances graduales, continuidad, etapas de desarrollo, desacuerdos y formas de superarlos, además de fortalecer el tejido social y mostrar lo fácil que es dañarlo y desintegrar el país. Imaginar la historia como una serie de actos fundacionales, reformas y contrarreformas, como hacen nuestras élites gobernantes, va en contra de lo que verdaderamente necesitamos. De hecho, siguiendo una regla democrática fundamental, hay que aceptar que en ella participan generaciones, tradiciones e intereses diversos, sin que ninguno tenga la última palabra.

El nuevo gobierno tendrá la oportunidad y la responsabilidad de demostrar que su intención de restablecer el orden puede coexistir con el pluralismo democrático. Esto ayudaría a estabilizar un sistema político que ha atravesado años de turbulencias, aunque esto vaya en contra de la «pureza» del proyecto ideológico. Si no logra hacerlo, Chile continuará enfrentando un ciclo de alternancias dramáticas, típico en momentos de incertidumbre en su historia.

M75